



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXI - N° 614

Bogotá, D. C., jueves, 2 de junio de 2022

EDICIÓN DE 12 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariassenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 443 DE 2022 CÁMARA

por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las Mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 443 DE 2022 CÁMARA

"POR EL CUAL SE CREA EL PLAN DE SALVAMENTO ECONÓMICO PARA LAS MIPYMES EN SITUACIÓN DE CRISIS COMPROBADA, DERIVADA DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

Por instrucción de la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes, conforme a lo establecido en la Ley 5 de 1992, presentamos informe de ponencia negativa para Primer Debate del Proyecto de Ley número 443 de 2022 Cámara "Por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones".

I. COMPETENCIA

La Comisión Tercera Constitucional Permanente, por disposición normativa, es competente para conocer del presente Proyecto de Ley, de conformidad con lo establecido por el Artículo 2º de la Ley 3 de 1992, por cuanto versa sobre: "hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; régimen monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos; mercado de valores; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro".

II. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

Durante la actual legislatura 2021-2022, el pasado 30 de marzo del año en curso, fue radicado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes por el Honorable Senador John Milton Rodríguez González, el Proyecto de Ley con consecutivo número 443 de 2022 Cámara "Por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones". Dada su naturaleza en materia de tributación, la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Honorable Cámara de Representantes ha nombrado a los congresistas H.R. Óscar Darío Pérez Pineda, H.R. Wadith Alberto Manzur Imbett, y H.R. Néstor Leonardo Rico Rico, para que rendan informe de ponencia para Primer Debate del mencionado Proyecto de Ley.

III. EL PROYECTO

Naturaleza	Proyecto de Ley
Consecutivo	No. 443 de 2022 (Cámara)
Título	Por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones.
Materia	Tributación
Autor	H.S. John Milton Rodríguez González
Ponentes	Coordinador ponente H.R. Óscar Darío Pérez Pineda Ponentes H.R. Wadith Alberto Manzur Imbett H.R. Néstor Leonardo Rico Rico
Origen	Cámara de Representantes
Radicación	30 de marzo de 2022
Tipo	Ordinaria
Estado	Pendiente de dar primer debate

IV. OBJETO DEL PROYECTO

De conformidad con lo expuesto por su autor, el Proyecto de Ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas administrativas, económicas y sociales de interés público, a efecto de impulsar la reactivación económica, mediante la creación de un denominado Plan de Salvamento Económico para las mipymes otorgando la refinanciación de las obligaciones financieras con deducción de los intereses moratorios.

V. CONTENIDO DEL PROYECTO

La presente iniciativa consta de 8 artículos. En el primer artículo se establece el objeto de la ley, en donde se enuncia la creación del plan de salvamento por emergencia sanitaria para las mipymes que se vieron afectadas y están ad-pertas de entrar en ley de insolvencia.

En el segundo artículo se relacionan algunas definiciones necesarias para entender a plenitud la presente iniciativa. Así mismo, en el siguiente artículo, se relacionan los principios bajo los cuales se desarrollará el plan de salvamento.

<p>El cuarto artículo crea de manera transitoria el plan de salvamento por emergencia sanitaria, se establece su alcance, financiación y vigencia.</p> <p>En el artículo quinto se precisan los beneficiarios del mencionado plan de salvamento, el tipo de carteras que se considerarán y algunas sanciones frente a la posible falsedad para ingresar al plan.</p> <p>El artículo sexto define los puntos mínimos para la ejecución del presente plan en donde se deberá dar una articulación efectiva entre los diferentes actores vinculados.</p> <p>La financiación se relaciona con el séptimo artículo, en donde se abre la posibilidad de apoyo de las entidades territoriales de contar con los recursos para ejecutarlo.</p> <p>Por último, en el artículo octavo, se promulga y derogan las disposiciones que le sean contrarias.</p> <p style="text-align: center;">VI. CONSIDERACIONES DE INCONVENIENCIA</p> <p>Es importante destacar que el 31 de diciembre de 2020 fue promulgada la Ley 2069 de 2020 <i>"Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia"</i>, o la denominada <i>Ley de Emprendimiento</i>, la cual es un marco normativo que busca propiciar, facilitar y promocionar el emprendimiento en el país, como una actividad importante de nuestra economía y necesaria para la reactivación económica de Colombia. Con dicha norma, se busca reducir trámites y costos que afectan a los emprendedores, facilitar el acceso a otros mercados como el de compras públicas, facilitar la llegada de recursos a los emprendedores, articular y organizar la oferta institucional del Gobierno en materia de emprendimiento y generar medidas que promuevan la educación en emprendimiento desde los colegios e instituciones de educación superior. Por lo tanto, en la actualidad, con la expedición de la Ley de Emprendimiento, el país y los emprendedores ya cuentan con nuevas herramientas para lograr crear, consolidar y crecer empresa y negocios productivos del país, y con ello generar crecimiento económico, desarrollo social y empleo.</p> <p>Debemos señalar que, para el Gobierno Nacional, el emprendimiento ha sido un pilar importante para lograr generar en el país equidad, crecimiento económico y desarrollo social. Recordemos que, en Colombia, alrededor del 95% de las empresas son del segmento de mipymes, por lo cual, con la Ley 2069 de 2020 ya se les brindan a ellos beneficios y ventajas, para que logren consolidarse y generar crecimiento económico en el país. Algunas de las medidas de apoyo que introdujo dicha Norma y que ya se encuentran en funcionamiento son, entre otras, la modificación de las tarifas del INVIMA, con diferenciación para Pymes y excepción de pago para microempresas; el ajuste en los rangos de las tarifas del Impuesto Departamental de Registro para microempresas; la creación del Sistema de</p>	<p>información para de Actividades Económicas Informales (SIECI); la también creación de visa para nómadas digitales, emprendedores y trabajadores remotos; la introducción de la contabilidad simplificada para microempresas; el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE); el importante fortalecimiento modelo de franquicias; el decidido apoyo a los emprendimientos del sector verde; y el establecimiento del denominado <i>"Microseguro"</i> y del <i>"seguro mipyme"</i> en el país. Todos estos, instrumentos tendientes a poder resolver los distintos problemas y retos que afrontan en el día a día los emprendedores colombianos, como la dificultad en la consecución de recursos, el exceso de trámites y costos, y la dificultad para obtener una ayuda o asistencia por parte del Gobierno, con el fin de lograr que emprender en Colombia sea más sencillo.</p> <p>Es claro que, con motivo de las difíciles circunstancias que vivimos durante la pandemia en el país, y de la crisis económica global que se derivó de ello, el Gobierno y el Congreso, encontraron en el emprendimiento una herramienta vital para lograr reactivar la economía y el aparato productivo nacional, con lo cual, con los avances de la Ley de Emprendimiento, se ha logrado generar un marco normativo que propicia la generación y consolidación de emprendimientos y negocios productivos en Colombia.</p> <p>A la luz de los hechos, aunque, el espíritu del Proyecto de Ley 443 de 2020 Cámara <i>"Por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones"</i>, objeto de nuestro estudio, resulta bastante loable y destacable en el escenario del emprendimiento (mipyme), es innegable en el marco de la realidad, que gran parte de sus objetivos y de su contenido ya se encuentra desarrollado y en ejecución con la Ley 2069 de 2020, toda vez que fortalece la articulación de la institucionalidad para el emprendimiento, y diversifica los esquemas de financiamiento para todo tipo de emprendimiento.</p> <p>Ante este panorama, teniendo en cuenta el contraste comparativo entre los beneficios derivados del efecto positivo tanto del Proyecto de Ley 443 de 2022 Cámara, como de la actual <i>Ley de Emprendimiento</i> (Ley 2069 de 2020) en vigencia, consideramos que diversos mecanismos ya se encuentran en marcha, lo cual hace innecesario desgastar el aparato legislativo en la expedición de un nuevo instrumento normativo para herramientas existentes. Sumado a ello, el Gobierno Nacional ha dispuesto 15 billones de pesos para apoyar y promocionar el emprendimiento y desarrollo empresarial en el país, para lo cual la <i>Ley de Emprendimiento</i> propicia un uso eficiente y articulado de dicho recurso, para que más emprendedores sean apoyados por el Estado, y puedan ser acompañados en su camino de emprender. Sea eso dicho, adicionalmente, el Proyecto de Ley en el cual se fundamenta este informe de ponencia, de conformidad con lo establecido en la Ley 819 de 2003, podría tener costo fiscal, frente a lo cual existe una reservada</p>
<p>preocupación, puesto que consideramos los ponentes no se hace necesario imponer más cargas al gasto público del Estado, en desarrollo del principio de austeridad.</p> <p style="text-align: center;">VII. SUSTENTACIÓN JURÍDICA</p> <p>Con independencia del espíritu que tenga el Proyecto de Ley 443 de 2022, el cual los ponentes destacamos, en nuestro juicio resulta que aquel proyecto no es procedente desde el punto de vista material, toda vez que se hace innecesaria la expedición de una iniciativa, cuyo gran parte de sus objetivos ya han sido contenidos en una norma que la precede y es reciente.</p> <p>Al respecto, en virtud del principio de unidad de materia, la Corte Constitucional en Sentencia ¹C-438 de 2019 ha señalado que (...) <i>Bajo ese entendido, frente al contenido del principio de unidad de materia, lo que cabe es una interpretación razonable y proporcional que permita establecer con claridad si entre las normas y la ley existe conexidad causal, teleológica, temática o sistémica, pues lo que de aquí se predica es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una Ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable (...).</i></p> <p>Ahora bien, sobre los parámetros para determinar cuándo existe una relación temática suficiente con el proyecto y cuándo se trata de un asunto nuevo que no guarda dicha relación, la Sentencia ²C-537 de 2012 ha expresado que (...) <i>La Corte ha identificado las reglas que permiten verificar la concurrencia de unidad temática entre lo debatido y las modificaciones introducidas. Sobre el particular, se ha previsto que "... el límite para inclusión de modificaciones por parte de las plenarias es su unidad temática con los asuntos previamente debatidos. Por ende, lo que recibe reproche constitucional es la introducción de temas autónomos, nuevos y separables, que no guarden relación con las materias debatidas en instancias anteriores del trámite. La Corte ha fijado los criterios materiales para determinar en qué caso se está ante la inclusión de un tema nuevo. Al respecto, la jurisprudencia prevé que "(i) un artículo nuevo no siempre corresponde a un asunto nuevo puesto que el artículo puede versar sobre asuntos debatidos previamente; (ii) no es asunto nuevo la adición que desarrolla o precisa aspectos de la materia central tratada en el proyecto siempre que la adición este comprendida dentro de lo previamente debatido; (iii) la novedad de un asunto se aprecia a la luz del proyecto de ley en su conjunto, no de un artículo específico; (iv) no constituye asunto nuevo un artículo</i></p> <p>¹ Corte Constitucional, sentencia del veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Magistrada Ponente Dra. Cristina Pardo Schlesinger, expediente D-13.119.</p> <p>² Corte Constitucional, sentencia del once (11) de julio de dos mil doce (2012). Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, expediente D-8874.</p>	<p><i>propuesto por la Comisión de Conciliación que crea una fórmula original para superar una discrepancia entre las Cámaras en torno a un tema"</i> (...).</p> <p>De conformidad con el principio de racionalización del gasto público, el máximo órgano constitucional, en Sentencia ³C-053 de 1998 ha dispuesto que (...) <i>Quiénes son responsables de la programación, aprobación y ejecución del gasto público, el gobierno y el legislador, paralelamente han de propender a la realización de dos objetivos fundamentales: de una parte mejorar las condiciones de trabajo y bienestar de los funcionarios a su servicio estableciendo salarios y prestaciones sociales justos y competitivos en el mercado, y de otra, disminuir el déficit que en el presupuesto ocasionan dichos gastos de funcionamiento, aspiraciones que en principio pueden parecer contradictorias, pero que en el contexto del Estado social de derecho han de encontrar un espacio propicio para su materialización simultánea (...).</i></p> <p>Dados los beneficios y exenciones fiscales, la Sentencia ⁴C-333 de 2017 de la Honorable Corte Constitucional ha manifestado que (...) <i>La Sala encuentra necesario insistir en que las exenciones y demás beneficios fiscales son medidas que por su naturaleza implican una excepción al principio de igualdad, aunque no necesariamente significan su vulneración. Por ello, para examinar su validez el juez constitucional debe analizar en cada caso si la diferencia es razonable, sobre la base de que la igualdad no significa la ausencia de distinciones ni es sinónimo de ciego igualitarismo, sino que responde a la necesidad de otorgar el mismo trato a quienes se encuentran en semejantes o iguales condiciones y de adoptar medidas distintas para quienes se hallan en hipótesis diversas, mediante la razonable búsqueda, por parte de la autoridad, del equilibrio y la ponderación (...).</i></p> <p>Finalmente, para articular la aplicación del principio de igualdad en la prosperidad general, refiriéndose a la generación de empleo formal y a la creación de empresas, la Corte Constitucional, mediante Sentencia ⁵C-115 de 2017 ha sostenido que (...) <i>En otras palabras, fines como el del logro de la prosperidad general no exige, de manera alguna, una actividad estatal idéntica en todos los sectores y respecto de todas las personas, ya que según las circunstancias, esto significaría afectar el fin esencial del Estado de asegurar la vigencia de un orden justo, el que subyace en el mandato de propender por la igualdad material y no simplemente formal. Esto quiere decir que, en el caso bajo examen, la manera de determinar si existe vulneración</i></p> <p>³ Corte Constitucional, sentencia del marzo cuatro (4) de mil novecientos noventa y ocho (1998). Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, expediente D-1753.</p> <p>⁴ Corte Constitucional, sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Magistrado Ponente Dr. Iván Humberto Escruercía Mayolo, expediente D-11762.</p> <p>⁵ Corte Constitucional, sentencia del veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Magistrado Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo, expediente D-11589.</p>

del artículo segundo de la Constitución Política, en lo relativo al fin esencial del Estado de propender por la prosperidad general, consiste en determinar si la medida de fomento discutida, que busca la prosperidad de un grupo de la población, mediante el estímulo a la generación de empleo formal y de creación de empresas, consulta el principio de igualdad material (...).

VIII. RELACIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS


El Consejo de Estado en Sentencia de 10 de noviembre de 2009, radicación número PI. 01180-00 expedida por la Sala de lo Contencioso Administrativo ha señalado que "No cualquier interés configura la causal de desinversión en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que perse el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concorra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna".

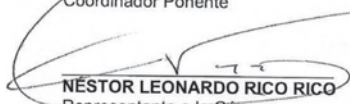
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones, que modifica el artículo 291 de la Ley 5 de 1992, en la que se estableció que el autor del proyecto y el ponente presentarán en la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrán generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, se considera que el presente proyecto de ley solamente genera conflictos de interés para alguno de los legisladores si su eventual aprobación acaece un beneficio particular, actual y directo a los congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019.

IX. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, de manera respetuosa rendimos ponencia de Primer Debate **NEGATIVA**, y en consecuencia solicitarle a la Honorable Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes **archivar** al Proyecto de Ley número 443 de 2022 Cámara "Por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones".

Atentamente,


OSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA
Representante a la Cámara
Coordinador Ponente


NÉSTOR LEONARDO RICO RICO
Representante a la Cámara
Ponente


WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT
Representante a la Cámara
Ponente

**CÁMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(ASUNTOS ECONÓMICOS)**

Bogotá D.C., 1 de junio de 2022. En la fecha se recibió en esta Secretaría el Informe de Ponencia **negativa** para Primer Debate del Proyecto de Ley N°443 de 2021 Cámara, "POR EL CUAL SE CREA EL PLAN DE SALVAMENTO ECONÓMICO PARA LAS MIPYMES EN SITUACIÓN DE CRISIS COMPROBADA, DERIVADA DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", suscrita por los Honorables Representantes a la Cámara **OSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA, WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT y NÉSTOR LEONARDO RICO RICO**, y se remite a la Secretaría General de la Corporación para su respectiva publicación en la gaceta del congreso, tal y como lo ordena el artículo 156 de la ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,


ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 050 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones.

<p>INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY N° 050 DE 2021 Cámara “Por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.</p> <p>El proyecto de Ley 050 de 2021 Cámara, fue presentado por los HH.RR Katherine Miranda Peña, Juan Fernando Reyes Kuri, Mauricio Andrés Toro Orjuela, Jorge Enrique Benedetti Martelo, José Daniel López Jiménez, Julián Peinado Ramírez, Abel David Jaramillo Largo, Harry Giovanni González García, Modesto Enrique Aguilera Vides, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, Carlos Germán Navas Talero, Wilmer Leal Pérez, César Augusto Pachón Achury, Felipe Andrés Muñoz Delgado, Andrés David Calle Aguas, Inti Raúl Asprilla Reyes, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Álvaro Henry Monedero Rivera, Jezmi Lizeth Barraza Arraut, Alejandro Carlos Chacón Camargo, Kelyn Johana González Duarte, César Augusto Lorduy Maldonado, Jaime Rodríguez Contreras, León Fredy Muñoz Lopera, Teresa De Jesús Enríquez Rosero, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Alejandro Alberto Vega Pérez, Luis Alberto Albán Urbano, Juan Carlos Lozada Vargas, Hernán Gustavo Estupiñan Calvache, Jairo Reinaldo Cala Suárez, Carlos Alberto Carreño Marín, David Ricardo Racero Mayorca, María José Pizarro Rodríguez, y los HH.SS Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Juan Luis Castro Córdoba, Iván Marulanda Gómez, Iván Cepeda Castro, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Wilson Arias Castillo, Alexander López Maya, Jesús Alberto Castilla Salazar el 20 de julio de 2021 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes.</p> <p>La Secretaría de la Comisión Primera Constitucional comunicó el 17 de agosto de 2021 de acuerdo con el Acta 04 de Mesa Directiva de la Comisión se designó como único ponente al suscrito representante.</p> <p>El trámite en primer debate se dio en los días 30 de marzo y 06 de abril del presente año. En el trámite del proyecto se presentaron proposiciones por parte de los H.R. Juanita Goebertus, Adriana Matiz, Gabriel Vallejo y Jorge Méndez. El texto aprobado tuvo proposiciones avaladas de estos representantes, salvo las presentadas por el Representante Vallejo.</p> <p>Finalmente, la Mesa Directiva me designó nuevamente como único ponente al suscrito representante.</p>	<p>2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY.</p> <p>Este proyecto de Ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, sin culpabilidad, por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges. Para tal fin, modifica la normatividad vigente en esta materia.</p> <p>Esta propuesta parte de una concepción de respeto por la dignidad humana y en atención a los principios constitucionales de libertad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía de la voluntad.</p> <p>3. PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER.</p> <p>La ausencia de una causal que le permita a los ciudadanos colombianos divorciarse por la voluntad de una de las partes, limitando el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. También busca crear una nueva causal para aquellos los ciudadanos que, aun teniendo causales objetivas y subjetivas que justifican su divorcio, deciden no invocarlas por respeto a su intimidad o por cualquier otra circunstancia.</p> <p>Las disposiciones normativas vigentes sobre el divorcio se basan en un concepto de culpabilidad y en unas causales taxativas para la terminación del vínculo jurídico matrimonial que no contemplan la manifestación unilateral de la voluntad de uno de los cónyuges como razón suficiente para la solicitud del divorcio.</p> <p>4. CÓMO SE RESUELVE EL PROBLEMA.</p> <p>El presente proyecto busca reformar disposiciones del Código Civil, específicamente el artículo 154 que establece las causales de divorcio al agregar la causal unilateral para poder solicitarlo. De igual manera, se agrega la forma en que deberá alegarse esta causal, la propuesta de divorcio del cónyuge solicitante y se establece el régimen de alimentos que se seguirá en para los casos en que uno de los conyugues no tenga medios de subsistencia.</p> <p>Este proyecto de ley atiende a una necesaria reinterpretación de la institución del matrimonio desde una perspectiva social y cultural que va de la mano con la sociedad diversa y pluralista moderna.</p> <p>5. EL DIVORCIO EN COLOMBIA</p>
<p>5.1. ANTECEDENTES.</p> <p>Los antecedentes del divorcio en Colombia se remontan inclusive al año 1853, año en el que autoras como Manotas (2020) consideran que se una separación de Iglesia con el Estado y, acto seguido, se termina por promulgar la denominada Ley Obando, que permitía la cesación de los efectos del matrimonio por muerte o por divorcio. Desde ese entonces se pueden determinar causales objetivas y subjetivas del divorcio como las existentes actualmente (Manotas, R.P, 2020). Sin embargo, para lo que nos compete en el presente proyecto de ley trataremos las causales actuales, su origen y la necesidad de crear una sola causal que permita el divorcio incausado en Colombia.</p> <p>5.1.1. Los fines del matrimonio.</p> <p>La jurisprudencia, la doctrina y la ley ha desarrollado de manera clara los fines del matrimonio. Estos se circunscriben a tres deberes en cabeza de los conyugues relacionados con vivir juntos, procrear, y auxiliarse mutuamente, los cuales no pueden ser negociados, ya sea para incluir o excluir obligaciones (Sentencia T-574/2016).</p> <p>De igual manera, resulta pertinente mencionar la forma en que surgen estas obligaciones, las características del contrato de matrimonio y los efectos del mismo (Sentencia C-394/17):</p> <p><i>“La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el matrimonio civil es un contrato solemne que genera derechos e impone deberes recíprocos a los cónyuges, es decir, es “es un acto constitutivo de familia que genera deberes en cabeza de los cónyuges”. Ello es así en tanto el artículo 113 del Código Civil dota de naturaleza contractual al matrimonio, asignándole un alcance bilateral habida cuenta que los consortes acuden a él de forma libre y se unen por mutuo consentimiento con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse. A partir de la definición dada por la ley, la doctrina sostiene que el matrimonio se caracteriza por ser un contrato: bilateral, porque una vez celebrado se constituye en fuente de derechos y obligaciones recíprocas entre los esposos, solemne, pues para su validez requiere el cumplimiento de ciertas y precisas formalidades especiales, puro y simple, ya que los derechos y obligaciones que surgen del mismo no pueden someterse a plazo o condición, de tracto sucesivo, por cuanto sus obligaciones se deben cumplir mientras perdure el matrimonio, y finalmente, en la actualidad, el entendimiento igualitario constitucional permite advertir que el matrimonio tiene una condición de diversidad en sus contrayentes. De acuerdo pues con su régimen jurídico especial, el contrato matrimonial produce dos tipos</i></p>	<p><i>de efectos: (i) los efectos de orden personal, que tienen que ver con los derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges y en relación con los hijos; y, (ii) los efectos de orden patrimonial, consecuencia de la existencia de la sociedad conyugal o comunidad de bienes que se forma con ocasión del matrimonio”.</i></p> <p>5.1.2. Los fines del divorcio.</p> <p>Los fines del matrimonio resultan ser lo más altruistas y solemnes de nuestra vida en sociedad. Se ha visto hasta ahora en esta ponencia cómo surgen las obligaciones del matrimonio, su solemnidad y sus fines, características que a la larga terminan por justificar la necesidad de proteger esta institución, considerada por muchos de nosotros como pilar fundamental de nuestra vida en sociedad. Sin embargo, hemos ido comprendiendo a lo largo de los años, que esas virtudes del matrimonio no son causal suficiente para obligar a los cónyuges a hacer prevalecer un vínculo matrimonial en contra de su voluntad, u obligarlo a permanecer en vida conyugal cuando no quisiera hacerlo, reconocido así por la ley y la jurisprudencia en distintas ocasiones. El divorcio surge entonces como figura para permitir terminar el vínculo matrimonial.</p> <p>La actora de la demanda de constitucionalidad de la Sentencia C-394 del año 2017, resumió con claridad esta posición al determinar que la finalidad del divorcio no es otra que <i>“disolver el vínculo matrimonial y con ello permitir que los cónyuges restablezcan sus vidas en aras de que cada uno pueda desarrollarse libremente como persona y escoger su estado civil”</i> (Sentencia C- 394/2017), posición que se comparte, pues de no reconocerse como tal, sería una limitación directa al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual.</p> <p>El matrimonio es un proceso muy común en Colombia, sin embargo, solo está permitido como lo conocemos desde el 17 de diciembre de 1992, cuando finalmente el Congreso de la República promulgó la ley que finalmente lo reglamentó, como bien lo señala Heli Abel Torrado (2018) en su escrito para el portal de derecho <i>“LEGIS”</i>. Las razones de que esto sucediera de esta manera no son muchas y, tampoco son diferentes a los mandatos religiosos que imperaban en el siglo pasado. Lo que se puede resumir en palabras de este autor de la siguiente manera (Torrado H, 2018):</p> <p><i>“Durante casi un siglo, en Colombia solo tuvo reconocimiento legal el matrimonio canónico, puesto que ningún creyente podía contraer matrimonio civil, porque se exponía a ser excomulgado. Si deseaba hacerlo, debía renunciar a su religión. La disolución del vínculo era de competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos y ante la jurisdicción civil solo era posible tramitar las separaciones</i></p>

de cuerpos, ya que el sacramento matrimonial es único e indisoluble: "Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre"."

Los cambios que vendrían en el año 1992 solo podrían ser consecuencia la Constitución del 91 que permitiría la cesación de los efectos civiles del matrimonio del matrimonio civil, pero también del religioso. Superando finalmente la restricción que había traído consigo el Concordato de 1973 que solo permitía el divorcio en materia civil (Torrado H, 2018). Bajo los nuevos supuestos de la entrante Constitución Política se promulgó la Ley 25 de 1992, en la que se determinaron las siguientes causales para poder solicitar el divorcio o la cesación de los efectos del matrimonio (Ley 25 de 1992):

Artículo 6. El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley 1 de 1976, quedará así:

1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges,
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
6. Toda enfermedad o anomalía grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.
8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.
9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia".

La jurisprudencia y la doctrina, de manera acertada ha clasificado estas causales como objetivas y subjetivas. A las causales 6,8 y 9, se les conocen como objetivas y se relacionan con la ruptura de lazos afectivos que pueden motivar al matrimonio, por ello, como bien menciona la Corte Constitucional en la Sentencia C-985 de 2010, al divorcio que surge como consecuencia de dichas causales se le conoce como divorcio remedio. Estas pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los conyugues y no le compete al juez realizar valoraciones sobre eventuales responsabilidades (Sentencia C-985, 2010).

Por otro lado, a los demás causales determinadas en el código civil se les conoce como causales subjetivas porque se relacionan con el incumplimiento de los deberes del matrimonio. En este caso, estas causales solo pueden ser invocadas por el cónyuge inocente, dentro del término de caducidad. De igual manera, el juez realiza una valoración de la eventual responsabilidad del cónyuge culpable y por ello al divorcio invocado con estas causales se le conoce como divorcio sanción (Sentencia C-985, 2010). Además, la Corte Constitucional (2010) menciona que la ocurrencia de las causales subjetivas deben ser demostradas, posición ante la cual el cónyuge podrá ejercer su derecho a la defensa, en los siguientes términos:

"(...) el cónyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado".

En conclusión, el divorcio, generalmente asociado con la terminación de la vida familiar, no es otra cosa que una "alternativa" para poner fin a una relación conyugal que se ha deteriorado y, por lo tanto, como ocurre en otro tipo de contratos, al finalizarse se determinan las distintas obligaciones que tienen los cónyuges entre sí, para sus hijos y las eventuales responsabilidades que puedan surgir dentro del matrimonio y como consecuencia del divorcio.

5.1.3. Necesidad de una nueva causal.

Como se mencionó anteriormente, a pesar de que existen causales y posibilidades para acceder al divorcio en Colombia, no existe una causal que permita a los conyugues divorciarse por la voluntad de uno de ellos, lo que en nuestro criterio termina por limitar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, tal y como se ha reconocido por la Corte Constitucional, al determinar que "obligar a una persona a permanecer casada aún en contra de su voluntad restringe de manera drástica sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad a la dignidad en su faceta de autodeterminación" (Sentencia C-985 de 2010, 2010).

En la misma sentencia la Corte menciona lo siguiente (Sentencia C-985 de 2010, 2010):

"Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución." (...)

En ese sentido, las disposiciones normativas vigentes sobre el divorcio se basan en un concepto de culpabilidad y en unas causales taxativas para la terminación del vínculo jurídico matrimonial que no contemplan la manifestación unilateral de la voluntad de uno de los cónyuges como razón suficiente para la solicitud del divorcio. Esta situación afecta los derechos de los ciudadanos que sin tener una causal objetiva o subjetiva de divorcio quisieran acceder al fin del vínculo matrimonial, pero también para aquellos que, aun teniendo causales objetivas y subjetivas que justifican su divorcio, deciden no invocarlas por respeto a su intimidad o por cualquier otra circunstancia.

Por otro lado, si se analiza la legislación de otros países se podrá notar que existe una clara tendencia a privilegiar que cualquiera de los cónyuges está facultado para solicitar la disolución del vínculo matrimonial de manera unilateral, e inclusive a eliminarse las causales subjetivas del divorcio, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 1. Derecho comparado.

País	Año	Ley	Objeto
Argentina	2014	Código Civil de la República Argentina (Argentina, 2014)	<p>Artículo 437. Divorcio. Legitimación El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.</p> <p>Artículo 438. Requisitos y procedimiento del divorcio Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la</p>

País	Año	Ley	Objeto
Nicaragua	2014	CÓDIGO DE FAMILIA (Nicaragua, 2014)	<p>Art. 137 Disolución del matrimonio. El matrimonio se disuelve:</p> <p>a) Por sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio.</p> <p>b) Por mutuo consentimiento.</p> <p>c) Por voluntad de uno de los cónyuges.</p> <p>d) Por muerte de uno de los cónyuges.</p>
México-Estado de	2018	Código Civil para el Estado de Nuevo León	Artículo 267.- y por mutuo consentimiento, cuando se solicita de común acuerdo en forma judicial o

País	Año	Ley	Objeto
Nuevo León		(Estado de Nuevo León, 2014)	administrativa en los términos de este Código, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y de la Ley del Registro Civil del Estado
España	2005	Ley 15 de 2005 (España, 2005)	Artículo primero. Modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio. El Código Civil se modifica en los siguientes términos: Dos. –El artículo 81 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio: 1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código. 2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación.»

Fuente: Elaboración UTL JFRK y Katherine Miranda, basados en la información disponible de cada país y en ANDERS (2004).

Por otro lado, el divorcio unilateral ya ha sido discutido en el plano jurisprudencial. Durante el análisis de los cargos que fundamentaron la expedición de la Sentencia C-394 de 2017 se tuvo la oportunidad de analizar si el régimen de culpabilidad que sustenta el divorcio en Colombia implicaba una afectación al libre desarrollo de la personalidad, pero se terminó por proferir un fallo contrario a estos postulados, pues consideró que las expresiones demandadas del artículo 156 del Código Civil, no desconocían el derecho al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que incumple sus deberes, pues resultaban ser una restricción admisible desde la óptica constitucional. Sin embargo, en aquella oportunidad el Magistrado Alberto Rojas Ríos salvaría voto para expresar sus argumentos para apartarse del fallo, argumentos que han servido para orientar esta discusión en el plano constitucional y legal, los cuales se podrían resumir los siguientes postulados (Rojas Ríos, 2017):

“El respeto por la autonomía de la persona humana es una categoría fundante que da lugar a que el juez pueda decretar el divorcio por la sola voluntad de uno de los contrayentes y, en ese sentido, la ley no puede inmiscuirse en la decisión libre de un cónyuge de divorciarse unilateralmente bajo criterios obsoletos de incumplimiento o culpabilidad que son a todas luces inconstitucionales. Es inconcebible que en el siglo XXI la función jurisdiccional se estanque en la culpabilidad para la terminación del matrimonio, siendo que en la práctica el vínculo de todos modos finaliza, sin importar quien lo provoque”. (Sentencia C-394, 2017).

(...) “La determinación de celebrar un matrimonio, al igual que aquella de mantenerlo o darlo por terminado, modificando de esta forma su estado civil y pudiendo crear una nueva familia, son decisiones íntimas del individuo, directamente vinculadas con su proyecto de vida, y en tal sentido, manifestaciones del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. De tal manera que el legislador no puede imponer barreras desproporcionadas, encaminadas a evitar que uno de los cónyuges pueda dar por terminado unilateralmente el vínculo matrimonial, cuando quiera que desee iniciar un nuevo proyecto de vida, sólo o con otra pareja” (Sentencia C-394, 2017).

De otra parte, como lo menciona Rojas Ríos (2017) en sus argumentos del salvamento de voto, es pertinente mencionar que el matrimonio y la figura de la familia, como tantas otras instituciones sociales que respaldan el ejercicio de derechos, también están sujetas a los cambios sociales que viven las sociedades a lo largo de su historia, por lo que estas no deberían ser interpretadas de manera estática, sino de manera dinámica.

Recordemos también que Colombia es un Estado pluralista que reconoce diferentes modelos de vida, lo que limita el paternalismo del Estado y hace que las medidas perfeccionistas sean excluidas del ordenamiento jurídico (Sentencia C-309/1997). Esa misma pluralidad hace que en Colombia solo sea aceptable adoptar medidas de protección que, sin imponer modelos de vida, busquen proteger los intereses propios y de terceros obligando a ejecutar ciertas medidas a favor de estas personas, como lo son por ejemplo: la adopción de la educación primaria obligatoria; el cinturón de seguridad; la irrenunciabilidad de derechos laborales, etc., tal y como lo señala la Corte Constitucional (1997) en la referida sentencia.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo planteado por Sergio Núñez (2021) en su escrito para la Universidad de San Francisco de Quito, sería importante cuestionarse si el modelo causalista del divorcio se trata de una medida perfeccionista, o si por el contrario, se trata de una política de protección del Estado que resulta ser aceptable en aras de garantizar los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio y, por su puesto, si al proteger este fin constitucionalmente valido no se estaría adoptando una medida que es desproporcionada para aquel conyugue que se le se le obliga a mantener el vínculo matrimonial al no tener causal para solicitar el divorcio, o teniéndola decide no invocarla.

Finalmente, con la implementación del divorcio incausado/unilateral en Colombia no busca desproteger a las familias, ni facilitar la división familiar, sino permitir el respeto por la libertad individual y la autonomía para quien decide dejar de estar en un matrimonio. La búsqueda del fortalecimiento de la familia como institución no pasa por limitar las causales del divorcio, sino por mejorar las dinámicas sociales que hoy afectan directamente a las familias colombianas (Lopera Bonilla O, 2016).

<https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/2368/2141>

6. CONFLICTOS DE INTERÉS.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992, se hacen las siguientes consideraciones:

Se estima que de la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley no podría generarse un conflicto de interés en consideración al interés particular, actual y directo de los congresistas, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o

primero civil, por cuanto se tratan de disposiciones de carácter general que modifican una ley orgánica.

Sobre este asunto ha señalado el Consejo de Estado (2019):

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:

“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en

el artículo 291 de la ley 5 de 1992 modificado por la ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de identificar causales adicionales.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES.

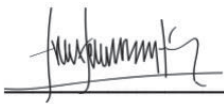
Se hacen las siguientes modificaciones para el segundo debate, atendiendo las preocupaciones de los representantes expresadas en primer debate:

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE	TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
<p>“POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO Y LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”</p>	<p>“POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO Y LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”</p>
<p>ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, sin culpabilidad, por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges.</p>	<p>ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges.</p>
<p>ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 154 del Código Civil, como numeral 10, el cual quedará así:</p> <p>ARTICULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio: (...)</p> <p>10. La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges a través de una propuesta de divorcio.</p>	<p>ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 154 del Código Civil, como numeral 10, el cual quedará así:</p> <p>ARTICULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio: (...)</p> <p>10. La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges a través de una propuesta de divorcio.</p>
<p>ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 156 del Código Civil, el cual quedará así:</p>	<p>ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 156 del Código Civil, el cual quedará así:</p>

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE	TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
<p>ARTÍCULO 156. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. Salvo en el caso de la causal 10ª, el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2a., 3a., 4a. y 5ª.</p> <p>Respecto a la causal 10ª cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada de una propuesta de divorcio de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo.</p> <p>Esta propuesta deberá contener por lo menos: disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y sobre la liquidación de la sociedad conyugal; disposiciones sobre la eventual compensación económica entre ellos, si es el caso; si hubiere hijos, la propuesta también comprenderá la forma como contribuirán los padres a su crianza, educación y establecimiento, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado</p>	<p>ARTÍCULO 156. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. Salvo en el caso de la causal 10ª, el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2a., 3a., 4a. y 5ª.</p> <p>Respecto a la causal 10ª cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada de una propuesta de divorcio de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo. <u>El demandado sólo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta.</u></p> <p>Parágrafo. La propuesta de divorcio deberá contener por lo menos: disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y sobre la liquidación de la sociedad conyugal; si hubiere hijos, la propuesta también comprenderá la forma como contribuirán los padres a su crianza, educación y establecimiento, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas y su periodicidad; primando</p>

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE	TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
<p>personal de los menores y régimen de visitas y su periodicidad; primando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.</p> <p>El juez podrá exigirle al cónyuge solicitante la constitución de garantías reales o personales para el cumplimiento de lo contenido en su propuesta de divorcio.</p>	<p>siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.</p>
<p>ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 160 del Código Civil, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 160. EFECTOS DEL DIVORCIO. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí.</p> <p>Cuando el divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso fuere solicitado bajo la causal 10ª, el demandado sólo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta.</p> <p>En este caso, el juez evaluará el contenido de ambas propuestas para verificar que se garanticen los derechos de las partes involucradas, de los hijos e hijas, procurando la obtención de un acuerdo.</p>	<p>ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 160 del Código Civil, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 160. EFECTOS DEL DIVORCIO. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí.</p> <p>Cuando el divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso fuere solicitado bajo la causal 10ª el juez evaluará el contenido de la propuesta de divorcio para verificar que se garanticen los derechos de las partes involucradas y de los hijos e hijas.</p>
<p>ARTÍCULO 5. Adiciónese un artículo nuevo al Código Civil como artículo 160A, el cual quedará así:</p>	<p>Se elimina.</p>

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE	TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
<p>ARTÍCULO 160A. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. El cónyuge que, con ocasión del divorcio, sufra un desequilibrio económico que implique un empeoramiento de su condición tendrá derecho a una compensación económica.</p> <p>La compensación podrá consistir en una renta temporal y determinada, o en cualquier tipo de compensación acordada por las partes o fijada por el juez a petición de parte.</p> <p>En este último caso el Juez calculará el monto y la procedencia de la compensación económica considerando, como mínimo, los siguientes criterios:</p> <p>a) La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y a la educación de los hijos durante la vigencia del matrimonio;</p> <p>b) La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;</p> <p>c) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial;</p> <p>d) La capacitación y experiencia laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de la parte que solicita la compensación económica;</p> <p>e) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;</p> <p>f) La duración del matrimonio;</p>	

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE	TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE	TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE	TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE
<p><i>g) Cualquier otra circunstancia que el juez considere relevante;</i></p> <p>Parágrafo Primero. <i>La compensación económica podrá solicitarse dentro del proceso de divorcio o hasta doce (12) meses después de ejecutoriada la sentencia de divorcio.</i></p> <p>Parágrafo Segundo. <i>Cuando la compensación se trate de una renta temporal, el monto de esta podrá modificarse a petición de parte ante el juez que la haya fijado, en aquellos casos que el beneficiario mejora su situación económica o empeora la del obligado al pago.</i></p> <p>Parágrafo Tercero. <i>El obligado a otorgar la compensación económica de la que habla este artículo, solo podrá oponerse a su procedencia cuando pruebe ante el juez la existencia de indicios de violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge a través de prueba sumaria, tal como la existencia de denuncias de violencia económica, psicológica o física.</i></p> <p><i>En el caso en que ambos cónyuges acrediten sumariamente la existencia de violencia intrafamiliar mutua, el juez deberá valorar esta situación de violencia junto con los criterios de la compensación económica para decidir sobre su procedencia o no.</i></p> <p>ARTÍCULO 6. <i>Modifíquese el Artículo 389 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</i></p> <p>ARTÍCULO 389. CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD O DE DIVORCIO. <i>La sentencia que decreta la</i></p>	<p>Se elimina.</p>	<p>nulidad del matrimonio civil, el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico dispondrá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A quién corresponde el cuidado de los hijos. 2. La proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil. 3. El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuere el caso. 4. El monto de la compensación económica que uno de los cónyuges deba al otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 160A del Código Civil, si fuere el caso. 5. A quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados, cuando la causa del divorcio determine suspensión o pérdida de la misma, o si los hijos deben quedar bajo guarda. 6. La condena al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, a favor del otro, si este lo hubiere solicitado. 7. El envío de copia de las piezas conducentes del proceso a la autoridad competente, para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o por terceros al 	
<p>celebrarse el matrimonio, si antes no lo hubiere ordenado.</p> <p>ARTÍCULO 5. ALIMENTOS PARA DIVORCIO INCAUSADO. Adiciónese un numeral nuevo, como numeral 11 al artículo 411 del Código Civil, el cual quedará así:</p> <p>ARTICULO 411. <i>Se deben alimentos:</i></p> <p><i>(...) 11). Al cónyuge al que por ocasión de divorcio tramitado bajo la causal 10ª, carezca de medios de subsistencia".</i></p> <p>ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.</p>	<p>ARTÍCULO 6. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.</p>	<p style="text-align: center;">8. PROPOSICIÓN.</p> <p>Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a la plenaria de la Cámara de Representantes, dar segundo debate y aprobar el proyecto de Ley No 050 de 2021 Cámara "Por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones", conforme al texto que se anexa.</p> <p>De los honorables congresistas,</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>JUAN FERNANDO REYES KURI Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Partido Liberal</p>	

9. TEXTO PROPUESTO SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY NO. 050 DE 2021 CÁMARA “POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO Y LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO CIVIL Y RELIGIOSO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges.

ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 154 del Código Civil, como numeral 10, el cual quedará así:

“ARTICULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio: (...)

10. La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges a través de una propuesta de divorcio”.

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 156 del Código Civil, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 156. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. Salvo en el caso de la causal 10ª, el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2a., 3a., 4a. y 5ª.

Respecto a la causal 10ª cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada de una propuesta de divorcio de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo. El demandado sólo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta.

Parágrafo. La propuesta de divorcio deberá contener por lo menos: disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y sobre la liquidación de la sociedad conyugal; si hubiere hijos, la propuesta también comprenderá la forma como contribuirán los

padres a su crianza, educación y establecimiento, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas y su periodicidad; primando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes”.

ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 160 del Código Civil, el cual quedará así:

“ARTÍCULO 160. EFECTOS DEL DIVORCIO. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí.

Cuando el divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso fuere solicitado bajo la causal 10ª el juez evaluará el contenido de la propuesta de divorcio para verificar que se garanticen los derechos de las partes involucradas y de los hijos e hijas”.

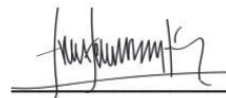
ARTÍCULO 5. ALIMENTOS PARA DIVORCIO INCAUSADO. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 411 del Código Civil, como numeral 11, el cual quedará así:

“ARTICULO 411. Se deben alimentos:

(...) 11). Al cónyuge al que por ocasión de divorcio tramitado bajo la causal 10ª, carezca de medios de subsistencia”.

ARTÍCULO 6. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,



JUAN FERNANDO REYES KURI
Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
Partido Liberal

10. REFERENCIAS.

ANDERS, S. R. (2004.). "The Cyclical Nature of Divorce in the Western Legal Tradition". *Loyola Law Review*, Vol. 50, 2004.

Argentina. (08 de 10 de 2014). Código Civil y Comercial de la Nación. *Ley 26.994*.

Beltrán y Puga Murai, A. L. (2020). *Movilización feminista y derecho de familia: la regulación del divorcio civil en Colombia (1930-1991)*. Obtenido de: <http://hdl.handle.net/1992/41235>

Corte Constitucional. C-394 de 2017 *Salvamento de Voto Magistrado Alberto Rojas (Corte Constitucional 2017)*.

Corte Constitucional. (21 de junio de 2017) *Sentencia C-394 de 2017. M.P: Diana Fajardo Rivera*.

Corte Constitucional. (2 de diciembre de 2010), *Sentencia C-985. M.P: Jorge Pretelt*.

Concejo de Estado. *Sala Contenciosa Administrativa del Concejo de Estado Sentencia 02830. M.P.: Carlos Enrique Moreno (2019)*.

Corte Constitucional, (20 de octubre de 2016), *Sentencia T-574. M.P: Alejandro Linares Cantillo*.

Corte Constitucional, (25 de junio de 1997), *Sentencia C.309 M.P: Alejandro Martínez Caballero*.

Congreso de Colombia. *Ley 25 de 1992, Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política*.

Congreso de Nicaragua. (24 de junio de 2014). *Código de Familia. Ley N° 87*.

España. (2005). *Ley 15 de 2005. Por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio*.

Estado de Nuevo León. (2014). *Código Civil. Número 112*.

Heli Abel Torrado (2018). *El divorcio en Colombia Cumplió 25 años*. Obtenido de: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/civil-y-familia/el-divorcio-en-colombia-cumplio-25-anos>

Lopera Bonilla O, (2016). *Reflexiones del Divorcio en Colombia*. Obtenido de: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/2368/2141>

Paola Ruiz Manotas (2017). *EL divorcio en Colombia y su relación con el posicionamiento social de la mujer*. Universidad del Norte.

Manotas, R. P. (2020, julio). *La construcción del divorcio en Colombia desde las normas jurídicas a partir del siglo XIX. Diferencias de género e influencia política y religiosa. Divorce in Colombia since the XIX Century: Gender Differences and Political and Religious Influence*. Recuperado 13 de mayo de 2022, de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-43662020000200109#:~:text=La%20separaci%C3%B3n%20entre%20Iglesia%20y,o%20por%20divorcio%20legalmente%20decidido

Núñez Dávila, S. (2021) «Divorcio incausado: una urgente actualización normativa». *USFQ Law Review*, Vol 8, no 2, octubre de 2021, pp. 157-181. Obtenido de: <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/2280/2877>

TEXTO APROBADO EN LA COMISION PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 050 DE 2021 CÁMARA

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO Y LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO RELIGIOSO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, sin culpabilidad, por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges.

ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 154 del Código Civil, como numeral 10, el cual quedará así:

ARTICULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio: (...)

10. La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges a través de una propuesta de divorcio.

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 156 del Código Civil, el cual quedará así:

ARTÍCULO 156. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. Salvo en el caso de la causal 10ª, el divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan y dentro del término de un año, contado desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. o desde cuando se sucedieron, respecto a las causales 2a., 3a., 4a. y 5ª.

Respecto a la causal 10ª cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada de una propuesta de divorcio de las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo.

<p><i>Esta propuesta deberá contener por lo menos: disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, si es el caso, y sobre la liquidación de la sociedad conyugal; disposiciones sobre la eventual compensación económica entre ellos, si es el caso; si hubiere hijos, la propuesta también comprenderá la forma como contribuirán los padres a su crianza, educación y establecimiento, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas y su periodicidad; primando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.</i></p> <p><i>El juez podrá exigirle al cónyuge solicitante la constitución de garantías reales o personales para el cumplimiento de lo contenido en su propuesta de divorcio.</i></p> <p>ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 160 del Código Civil, el cual quedará así:</p> <p><i>ARTÍCULO 160. EFECTOS DEL DIVORCIO. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí.</i></p> <p><i>Cuando el divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso fuere solicitado bajo la causal 10ª, el demandado sólo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta.</i></p> <p><i>En este caso, el juez evaluará el contenido de ambas propuestas para verificar que se garanticen los derechos de las partes involucradas, de los hijos e hijas, procurando la obtención de un acuerdo.</i></p> <p><i>A falta de acuerdo entre los cónyuges el juez determinará las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la sentencia de divorcio, de acuerdo con el inciso primero de este artículo.</i></p> <p>ARTÍCULO 5. Adiciónese un artículo nuevo al Código Civil como artículo 160A, el cual quedará así:</p> <p><i>ARTÍCULO 160A. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. El cónyuge que, con ocasión del divorcio, sufra un desequilibrio económico que implique un empeoramiento de su condición tendrá derecho a una compensación económica.</i></p> <p><i>La compensación podrá consistir en una renta temporal y determinada, o en cualquier tipo de compensación acordada por las partes o fijada por el juez a petición de parte.</i></p>	<p><i>En este último caso el Juez calculará el monto y la procedencia de la compensación económica considerando, como mínimo, los siguientes criterios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y a la educación de los hijos durante la vigencia del matrimonio;</i> <i>b) La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos;</i> <i>c) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial;</i> <i>d) La capacitación y experiencia laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de la parte que solicita la compensación económica;</i> <i>e) La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;</i> <i>f) La duración del matrimonio;</i> <i>g) Cualquier otra circunstancia que el juez considere relevante;</i> <p>Parágrafo Primero. <i>La compensación económica podrá solicitarse dentro del proceso de divorcio o hasta doce (12) meses después de ejecutoriada la sentencia de divorcio.</i></p> <p>Parágrafo Segundo. <i>Cuando la compensación se trate de una renta temporal, el monto de esta podrá modificarse a petición de parte ante el juez que la haya fijado, en aquellos casos que el beneficiario mejora su situación económica o empeora la del obligado al pago.</i></p> <p>Parágrafo Tercero. <i>El obligado a otorgar la compensación económica de la que habla este artículo, solo podrá oponerse a su procedencia cuando pruebe ante el juez la existencia de indicios de violencia intrafamiliar por parte de su cónyuge a través de prueba sumaria, tal como la existencia de denuncias de violencia económica, psicológica o física.</i></p> <p><i>En el caso en que ambos cónyuges acrediten sumariamente la existencia de violencia intrafamiliar mutua, el juez deberá valorar esta situación de violencia junto con los criterios de la compensación económica para decidir sobre su procedencia o no.</i></p> <p>ARTÍCULO 6. Modifíquese el Artículo 389 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 389. CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE NULIDAD O DE DIVORCIO. <i>La sentencia que decrete la nulidad del matrimonio civil, el divorcio o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico dispondrá:</i></p>
---	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. A quién corresponde el cuidado de los hijos. 2. La proporción en que los cónyuges deben contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento de los hijos comunes, de acuerdo con lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 257 del Código Civil. 3. El monto de la pensión alimentaria que uno de los cónyuges deba al otro, si fuere el caso. 4. El monto de la compensación económica que uno de los cónyuges deba al otro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260A del Código Civil, si fuere el caso. 5. A quién corresponde la patria potestad sobre los hijos no emancipados, cuando la causa del divorcio determine suspensión o pérdida de la misma, o si los hijos deben quedar bajo guarda. 6. La condena al pago de los perjuicios a cargo del cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del vínculo, a favor del otro, si este lo hubiere solicitado. 7. El envío de copia de las piezas conducentes del proceso a la autoridad competente, para que investigue los delitos que hayan podido cometerse por los cónyuges o por terceros al celebrarse el matrimonio, si antes no lo hubiere ordenado. <p>ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.</p> <p>En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente Proyecto de Ley según consta en Actas No. 38 de Sesión Presencial de Marzo 30 de 2022 y Acta No. 39 de Sesión Presencial de Abril 06 de 2022. Anunciado entre otras fechas, el 29 de Marzo de 2022 según consta en Acta No. 37 de Sesión Presencial y el 30 de Marzo de 2022 según consta en Acta No. 38.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  JUAN FERNANDO REYES KURI Ponente Coordinador </div> <div style="text-align: center;">  JULIO CÉSAR TRIANA QUINTERO Presidente </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  AMPARO Y. CALDERON PERDOMO Secretaria </div>
--	---

INFORME DE SUBCOMISIÓN

INFORME DE SUBCOMISIÓN PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil.

ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NÚMERO 154 DE 2021 CÁMARA

por el cual se promueve la contratación de jóvenes y se dictan otras disposiciones.

INFORME DE SUBCOMISIÓN PROYECTO DE LEY NO. 126 DE 2021 CÁMARA "POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS ECONÓMICOS A FAVOR DE LOS JÓVENES, SE GENERAN ALGUNAS MEDIDAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL Y SE PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL" ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY NO. 154 DE 2021 CÁMARA "POR EL CUAL SE PROMUEVE LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

De acuerdo con la designación hecha por la Mesa Directiva de la Comisión III de la Cámara de Representantes, presentamos Informe de Subcomisión del Proyecto de Ley No. 126 de 2021 Cámara "Por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil" acumulado con el Proyecto de Ley No. 154 de 2021 Cámara "Por el cual se promueve la contratación de jóvenes y se dictan otras disposiciones".

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y TRÁMITE.

El Proyecto de Ley No. 126 de 2021 Cámara "Por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil", fue radicado ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el pasado 22 de julio de 2021 y se publicó en la Gaceta No. 959 de 2021. Por su parte, el Proyecto de Ley No. 154 de 2021 Cámara "Por el cual se promueve la contratación de jóvenes y se dictan otras disposiciones" fue radicado el 29 de julio del presente año y publicado en la Gaceta 1025 de 2021.

Posteriormente, ambos proyectos fueron acumulados por la Comisión III de Cámara según los artículos 151 y 152 de la Ley 5 de 1992, que además designó a los Honorables Representantes Salim Villamil Quessep y Enrique Cabrales Baquero (Coordinadores), Yamil Hernando Arana Paduaí, Fabio Fernando Arroyave Rivas, Wadith Alberto Manzur Imbett, Erasmo Elías Zuleta Bechara y David Ricardo Racero Mayorca como Coordinadores y Ponentes para primer debate, designación notificada por correo electrónico el pasado 10 de septiembre de 2021.

El 11 de octubre de 2021, el H.R. Erasmo Elías Zuleta Bechara presentó renuncia a su designación como ponente de la presente iniciativa legislativa por encontrarse inmerso en un conflicto de intereses con relación al artículo 4 del Proyecto de Ley 154 de 2021 Cámara.

Así las cosas, los ponentes solicitaron concepto sobre el contenido de los proyectos de ley objeto del presente informe a las siguientes entidades: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Administrativo Nacional de

Estadística DANE y Red Nacional de Cámaras de Comercio CONFECÁMARAS el pasado 22 de septiembre de 2021. Vencido el plazo para rendir informe de ponencia para primer debate sin que se hubieran recibido los conceptos mencionados, los ponentes radicaron solicitud de prórroga ante la Comisión III de la Cámara de Representantes, solicitud que fue resuelta favorablemente, de acuerdo con el correo electrónico que notificó dicha decisión, recibido el 29 de septiembre del año en curso.

El 13 de octubre de 2021 se solicitó concepto sobre la viabilidad jurídica y técnica de dos artículos del Proyecto de Ley 126 de 2021 Cámara, pues estos tendrían impacto en temáticas que son de su competencia,

Con ocasión del debate que se surtió en Comisión Tercera y los conceptos allegados por las entidades, se tomó la decisión de crear una Subcomisión que rindiera informe sobre la viabilidad de las iniciativas mencionadas.

Por medio de correo electrónico del 30 de marzo de 2022 enviado por la Secretaría General de la Comisión Tercera se designaron como integrantes de la "Subcomisión que continuará con el estudio del Proyecto de Ley No. 126 de 2021 Cámara, "Por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil", acumulado con el PL 154 de 2021 Cámara, "Por el cual se promueve la contratación de jóvenes y se dictan otras disposiciones", al H.R. Salim Villamil Quessep, H.R. Enrique Cabrales Baquero, H.R. Fabio Fernando Arroyave Rivas, H.R. Wadith Alberto Manzur Imbett, H.R. Yamil Hernando Arana Paduaí, H.R. David Ricardo Racero Mayorca, H.R. Oscar Darío Pérez Pineda y H.R. Erasmo Elías Zuleta Bechara.

CONSIDERACIONES.

De conformidad con el concepto presentado por parte del Ministerio de Hacienda en oficio remitido a la Comisión Tercera el 09 de diciembre de 2021, se destacan los siguientes comentarios:

Artículo 3:

Se señala que teniendo en cuenta que la medida implicaría la disminución de los recursos obtenidos por el Ministerio de Defensa Nacional, es importante señalar que la Dirección de Finanzas de dicha Cartera informó que, entre las vigencias 2010 y 2020, el recaudo por CCP disminuyó un 90%, pasando de \$41.406 millones a \$4.299 millones, que se justifica en su mayoría por la expedición de la Ley 1861 de 2015. Por lo tanto, con la amnistía propuesta en este artículo, se afectaría y disminuiría el recaudo proyectado de ingresos por este concepto, generando traumatismos de financiación de necesidades prioritarias al

interior del sector, como el desarrollo de planes de índole militar o de la policía (operaciones militares de asalto aéreo, de interdicción, antisequestro y contra la extorsión, gastos reservados, entre otros) que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya naturaleza imprescindible debe ser declarada por el Ministerio de Defensa Nacional.

Adicional, es importante resaltar que la Ley 1961 de 2019 establece en su artículo 1 una amnistía en las mismas condiciones a todos aquellos colombianos que estuviesen en condición de infractores a la Ley 1861 de 2017 y la cual encuentra vigente a la presente fecha.

Por lo anterior, de ser aprobada la propuesta de amnistía establecida en el artículo 3 de la iniciativa, el sector de la Defensa Nacional habrá dejado de percibir recursos por este concepto por un período de 24 meses casi ininterrumpidos.

Artículos 8, 9 y 10:

Se señala que corresponden a beneficios tributarios que requieren contar con el aval del Gobierno nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Carta Política y la interpretación de este artículo por la Corte Constitucional, so pena de incurrir en un vicio de inconstitucionalidad. Para el caso de avales fiscales y tributarios, el Gobierno nacional se encuentra representado en el Ministerio de Hacienda conforme a sus competencias. Los artículos mencionados no cuentan con el aval de esa Cartera conforme se deja de manifiesto en la comunicación recibida.

Frente a estas propuestas, resulta importante resaltar que el artículo 137 de la Ley 2010 de 2019 creó la Comisión de Estudio de Beneficios Tributarios, la cual señaló que Colombia debería apartarse del uso excesivo de gastos tributarios, aquellos que se materializan en exenciones, deducciones, descuentos, tarifas reducidas o diferimientos tributarios, en la medida que generan un costo significativo en el recaudo tributario y aquellos que no logran estimular el crecimiento económico y mejorar el bienestar, además de generar problemas distribucionales.

En tal virtud, cualquier tipo de beneficio tributario, tales como exenciones, exclusiones, disminuciones de tarifas de impuestos, zonas especiales, sobre deducciones, entre otros, se debería analizar y proponer con base en el informe de esta Comisión, a través de iniciativas que tengan como referente la Ley Orgánica de Presupuesto, las leyes de sostenibilidad y regla fiscal, y la reciente Ley expedida de inversión social, presentada por el Gobierno nacional.

Comentarios generales:

- La pandemia ha implicado una demanda de recursos importantes para atender la emergencia sanitaria y compensar parcialmente las caídas de los ingresos de los hogares y las empresas, todo esto respaldado mediante una acción de gasto contra cíclico. Por otro lado, la contracción en la actividad económica y el deterioro de los términos de intercambio derivaron en una contracción de los ingresos fiscales. Así, de forma conjunta, estos dos elementos han llevado a un incremento sustancial en el déficit fiscal y el endeudamiento público.

- Con base en la misma preocupación que cimienta la iniciativa bajo estudio, en la Ley de inversión social, en su artículo 24, se creó un incentivo a la creación de nuevos empleos. Con dicha medida, se introducen tres beneficios fiscales destinados a la generación de empleo en el país, y en particular se busca proteger a sectores de la población especialmente afectados con ocasión de la pandemia, como los jóvenes y las mujeres.

- El Proyecto de ley propone el no pago de aportes a seguridad social por contratación de jóvenes durante los dos primeros años, lo que a todas luces generaría un impacto fiscal para el Estado Colombiano al no recibir los aportes de quienes accedan a este beneficio.

- Actualmente existen beneficios fiscales para las personas jurídicas, los cuales deben ser revisados para efectos de evitar generar dobles beneficios tributarios para unos mismos hechos económicos o sujetos beneficiarios. Así las cosas, es importante advertir que el Estatuto Tributario ya estableció incentivos de tipo fiscal, asociados con el apoyo a la educación de los jóvenes, tales como en el artículo 107-2 del Estatuto Tributario, el cual consagra una deducción por las contribuciones a educación de los empleados o de los miembros de su núcleo familiar. De igual forma, el artículo 257-1 del Estatuto Tributario establece un beneficio tributario denominado "becas por impuesto", que permite a deportistas talento, la posibilidad de obtener becas de estudio y manutención, por las que las personas jurídicas o naturales recibirán a cambio títulos negociables para el pago del impuesto sobre la renta. Finalmente, es preciso anotar que el Estatuto Tributario, en su artículo 108, estableció una deducción del primer empleo, para contribuyentes del impuesto sobre la renta que vinculen trabajadores menores de 28 años, otorgándoles una deducción 120% de los pagos salariales por cada joven que contrate mediante contrato de trabajo.

- Las iniciativas legislativas que se propongan deben guardar armonía en materia de austeridad del gasto y deben estar acompañadas de fuentes de financiamiento que cubran estos gastos, además de medidas complementarias que incrementen los ingresos tributarios o pongan en marcha iniciativas de austeridad del gasto público, con el fin de asegurar la sostenibilidad fiscal, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021.

- Ministerio de Hacienda se abstiene de emitir concepto favorable sobre la totalidad del Proyecto de Ley.

PROPOSICIÓN.

Con fundamento en las razones expuestas, solicitamos a los Honorables Representantes que integran la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes **ARCHIVAR** el Proyecto de Ley No. 126 de 2021 Cámara "Por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil" acumulado con el Proyecto de Ley No. 154 de 2021 Cámara "Por el cual se promueve la contratación de jóvenes y se dictan otras disposiciones".

Firman los Honorables Congresistas,

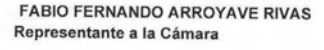

SALÍM VILLAMIL QUESSEP
 Representante a la Cámara


ENRIQUE CABRALES BAQUERO
 Representante a la Cámara

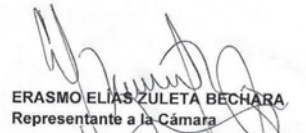

YAMIL HERNANDO ARANA PADAUI
 Representante a la Cámara


WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT
 Representante a la Cámara


DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
 Representante a la Cámara


FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
 Representante a la Cámara


OSCAR DARIÓ PÉREZ PINEDA
 Representante a la Cámara


ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA
 Representante a la Cámara

**CÁMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN TERCERA
 CONSTITUCIONAL PERMANENTE
 (ASUNTOS ECONÓMICOS)**

Bogotá D.C., 2 de junio de 2022. En la fecha se recibió en esta Secretaría el Informe de la Subcomisión para estudiar El Proyecto de Ley No.126 de 2021 Cámara acumulado con el Proyecto de Ley No.154 de 2021 Cámara : **"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS ECONÓMICOS A FAVOR DE LOS JÓVENES, SE GENERAN ALGUNAS MEDIDAS PARA SUPERAR LAS BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL Y SE PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL"**, suscrito por los Representantes a la Cámara SALÍM VILLAMIL QUESSEP, ENRIQUE CABRALES BAQUERO, FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS, WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT YAMIL HERNANDO, ARANA PADAUI DAVID RICARDO RACERO MAYORCA y ERASMO ELÍAS ZULETA BECHARA, y se remite a la Secretaría General de la Corporación para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,


ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA

CONTENIDO

Gaceta número 614 - Jueves, 2 de junio de 2022
 CÁMARA DE REPRESENTANTES
 PONENCIAS

Págs.

Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 443 de 2022 Cámara, por el cual se crea el Plan de Salvamento Económico para las Mipymes en situación de crisis comprobada, derivada de la emergencia sanitaria y se dictan otras disposiciones.	1
Informe de ponencia positiva para segundo debate, pliego de modificaciones, texto propuesto y texto aprobado en Comisión Primera al Proyecto de ley número 050 de 2021 Cámara, por medio de la cual se permite el divorcio y la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges y se dictan otras disposiciones.	4
INFORME DE SUBCOMISIÓN	
Informe de subcomisión Proyecto de ley número 126 de 2021 Cámara, por medio de la cual se establecen alivios económicos a favor de los jóvenes, se generan algunas medidas para superar las barreras de acceso al mercado laboral y se promueve el emprendimiento juvenil; acumulado con el Proyecto de ley número 154 de 2021 Cámara, por el cual se promueve la contratación de jóvenes y se dictan otras disposiciones.	11